

¿Modernización autoritaria o actualización del populismo? La transición política en Venezuela*

Luis Gómez Calcaño y Nelly Arenas **

Resumen

Este trabajo intenta comprender el proceso político de la Venezuela actual bajo el liderazgo del Presidente Chávez durante el primer año de su ejercicio de gobierno, partiendo de una perspectiva histórica y procurando examinado en conexión con el fenómeno populista típico de la historia política de la región desde la segunda mitad del siglo XX. Se examinan los antecedentes de la actual coyuntura histórica, los rasgos del “sistema populista de conciliación” que predominó en los últimos cuarenta años, las razones de su deterioro definitivo, así como los múltiples y contradictorios rasgos que permitirían relacionar al régimen actual con los estilos políticos populistas y neopopulistas.

Palabras clave: Populismo, autoritarismo, Chávez, Venezuela.

Authoritarian modernization or up-dating of populism? Political transition in Venezuela

Abstract

This paper tries to understand the political process of present-day Venezuela under President's Chávez leadership during the first year of his government, utilizing a historical perspective and trying to examine its connection with the typical populist phenomenon in the political history of the region over the second half of the XX century. The historical antecedents of current opportunities are examined, as well as the features of the “populist system of reconciliation” that prevailed over the last forty years, the reasons for its definitive deterioration, and the multiple

Recibido: 25-05-01. Aceptado: 23-07-01

* Una versión preliminar de esto trabajo fue presentada en el 50º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Varsovia del 10 al 14 de julio de 2000. Con la colaboración de Thanalí Patruyo (CENDES/UCV).

** CENDES. Av. Nevarí, Edif. FUNDAVAC, Colinas de Bello Monte. Caracas. Telf. 0212-7531090. E-mail: upcendes@reacciun.ve.

and contradictory features that would permit its relationship with the current régime with its populist and neo-populist political styles.

Key words: Political populism, authoritarianism, Chávez, Venezuela.

Antecedentes

La actual transición política venezolana, aunque avanza a un ritmo acelerado, tiene sus raíces en procesos sistémicos que se fueron desarrollando durante, al menos, los últimos veinte años. Venezuela ha sido siempre un caso atípico en el contexto latinoamericano, no sólo por su condición de país petrolero, sino por la forma en la cual esta característica ha moldeado al conjunto de la sociedad, al Estado y a las instituciones y actores políticos.

La “excepcionalidad” venezolana consistía en una atenuación de la pugna distributiva entre los actores sociales internos, como efecto de la existencia de una renta de origen externo que se convertía en una fuente de riqueza superior a cualquiera que pudiera generar la capacidad productiva del país. Pero este hecho no acarrearía automáticamente una atenuación paralela de la lucha política por el poder, ya que el control del Estado y por lo tanto de los recursos de origen petrolero daba una ventaja considerable al actor o actores que lo dominaran.

La transición hacia una sociedad moderna

En una perspectiva histórica de largo plazo, el paso de un modelo de organización política oligárquica basada en la propiedad agraria a una dominación conformada por coaliciones inestables de actores “modernos” se acelera y es moldeado en Venezuela por la rápida reinsertión en el mercado mundial producida por la explotación petrolera. Dicha actividad se inicia en forma sostenida en la segunda década del siglo XX, y supera al café como primer rubro de exportación en 1928.

Aunque los gobiernos de Castro (1899-1908) y Gómez (1908-1935) habían iniciado ciertos procesos de modernización y centralización político-administrativa, como la creación de un ejército profesional, el ordenamiento de las finanzas públicas y la ampliación de las vías de comunicación, el aporte de la renta petrolera permitió acelerar y profundizar esos procesos. La creciente importancia del Estado como centralizador y distribuidor de los recursos originados en el petróleo, así como el impacto de la depresión de los años treinta en la ya decadente agricultura de exportación, erosionaron las bases tradicionales del poder político y abrieron el campo a las ambiciones de nuevos actores. Entre ellos se encontraban incipientes empresarios, profesionales y trabajadores urbanos, empleados públicos, militares de carrera y un pequeño pero activo núcleo de trabajadores petroleros.

El largo régimen gomecista había alcanzado dos logros históricos: por una parte, estableció una paz duradera, en contraste con la inestabilidad política y el estado de guerra civil casi permanente que caracterizaron al país en el siglo XIX. Por la otra, y estrechamente ligado a lo anterior, unificó al territorio bajo la autoridad del gobierno central, liquidando a los caudillos regionales y sus huestes, o sometidos a las jerarquías establecidas por el dictador. El largo período de paz ininterrumpida, aunque sentó las bases para la continuidad de la acumulación y

perfeccionó el aparato jurídico del Estado liberal, no podía ocultar el hecho de fundarse en una concentración absoluta del poder, complementada con una fachada de instituciones formalmente representativas, por una parte, y un aparato represivo que negaba cualquier disidencia.

El petróleo, aunque permitió al régimen de Gómez consolidar algunos de sus logros, como la reducción y finalmente la redención total de la deuda externa, introdujo también elementos de inestabilidad, al generar estratos y actores sociales más cercanos a las actitudes y valores políticos “modernos”, y al crear las bases para una economía más dinámica, basada en un producto de exportación estratégico; para algunos actores, se abría al fin la posibilidad de llevar adelante las utopías de “progreso” que el país había perseguido con muy poco éxito en el siglo XIX. Para este punto de vista, el régimen de Gómez era un obstáculo, ya que por su extremada concentración de poder y conservadurismo dejaba al margen de la nueva prosperidad petrolera a la mayor parte de la sociedad venezolana.

Sin embargo, el descontento de ciertas élites políticas y la elaboración de los programas alternativos que les llevarían a reorientar al país fueron procesos lentos y graduales, que permitieron al gomecismo decaer en medio de una larga transición dirigida por dos de sus epígonos. En 1928 se producen los primeros cuestionamientos de masas al régimen de Gómez, originando la llamada “Generación del 28”, que será el semillero de la elite política dominante por casi todo el resto del siglo; pero estos nuevos actores pasarán por un largo proceso de constitución, signado por el exilio, la prisión, los debates de tendencias, la construcción de organizaciones, hasta culminar con el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que lleva al poder a una alianza cívico-militar dirigida por integrantes de la generación del 28.

En esos diecisiete años de transición, el régimen de los últimos años de Gómez y especialmente los de sus sucesores López Contreras (1935-41) y Medina Angarita (1941-45) efectuaron importantes intentos de modernización y apertura política. De hecho, se fue pasando gradualmente de una dictadura unipersonal rodeada de un ejército incondicional al caudillo, a un régimen autoritario pero legitimado por un ejército institucional, y de allí a un gobierno pluralista, que legalizó a todos los partidos, permitió la acción política y sindical, pero mantuvo restricciones a la participación política. El debate sobre si estas reformas iban a desembocar efectivamente en el alcance de la plena ciudadanía para todos, o si eran simple maquillaje para hacer ganar tiempo a un régimen sin futuro, ha sido constante en Venezuela y no ha logrado conclusiones unánimes. Pero, a juzgar por la reacción de las grandes mayorías del país en 1945, con su apoyo al gobierno surgido del golpe del 18 de octubre y al partido Acción Democrática, su principal protagonista, el juicio al régimen de transición era que había hecho demasiado poco y demasiado tarde.

La “Revolución de Octubre”: ¿Un populismo modernizador?

¿Quiénes eran los nuevos actores hegemónicos y cuál era su proyecto? En ellos se mezclaban estrechamente dos ejes aparentemente distantes o contradictorios: por una parte la reivindicación del “pueblo”, entendido a priori como los más pobres, los campesinos, los analfabetas (hasta ese

momento excluidos del voto); y por la otra la modernización basada en la industrialización, dirigida por un Estado fuerte, pero dentro de un marco explícitamente capitalista¹.

Es significativo que al golpe de octubre y el régimen que instauró hayan sido designados por sus protagonistas como “Revolución”. Con ello querían enfatizar en la discontinuidad con el régimen anterior, en la “novedad” absoluta en el país de las instituciones que introducían, especialmente del sufragio universal, y en el carácter refundador de la nación que pretendían dar a su acción histórica. Esta combinación de factores se sintetiza en la idea-fuerza según la cual un nuevo actor, el pueblo, ha desplazado a la oligarquía del centro de la construcción de la nación.

Sin embargo, otros niveles del discurso matizan y complejizan la idea de pueblo, incluyendo en ella una diversidad de actores como obreros petroleros, maestros, burócratas, pequeños y medianos agricultores y empresarios, enlazados por su común oposición a la “oligarquía” y al imperialismo. No hay, como en el modelo marxista, una clase social destinada naturalmente a ser la vanguardia y guía de las otras; por lo tanto, el proyecto es ante todo nacional y no clasista² y en consecuencia su dirección estratégica estará en manos del articulador del proceso, el partido como mediador de las diferencias entre los grupos que forman a la entidad compleja y diversa que es el “pueblo”³.

Partido y Estado forman así el eje fundamental del nuevo proceso de desarrollo⁴, que fundamenta su viabilidad en la articulación de intereses de diferentes estratos alrededor de la oposición al minoritario (y casi imaginario) grupo de la “oligarquía”. Entre el individuo, actor central del modelo liberal, y la clase, eje de la propuesta marxista, surge el moderno partido de masas como actor autónomo y articulador de las parcialidades en un proyecto a la vez hegemónico y plural. A su vez, el “cuadro partidista parece sintetizar algo de los rasgos de los componentes de la alianza: generalmente de origen modesto, con un cierto grado de educación formal, disciplinado por su contacto con el mundo de la producción y el movimiento sindical, arraigado a los símbolos de la tierra y la nación, emprendedor y audaz en la búsqueda de oportunidades de promoción social. Esta multiplicidad de identidades potenciales le permitirá, con el tiempo y la estabilización del régimen

¹ Esta aparente contradicción es, por supuesto, característica de los populismos de los años cuarenta, y era intensamente denunciada por los partidos comunistas, quienes la consideraban una traición a los orígenes marxistas de muchos de estos actores y partidos populistas. Sin embargo, esta combinación de reivindicación simbólica de los más pobres con un reconocimiento pragmático de los límites (económicos, sociales y políticos) de las “revoluciones” latinoamericanas fue más exitosa, en casi todos los países, que la opción marxista, aparentemente más coherente que la populista.

² En este aspecto vale la pena mencionar la visión de Alain Touraine (1998) sobre el populismo latinoamericano. Para Touraine el populismo “...no es ni categoría social, ni ideología, ni Estado, sino la fusión de los tres elementos en un conjunto a la vez social, político y estatal. Por eso populismo en América Latina es ante todo una política nacional popular, expresión que une la referencia al pueblo como esencia, a la nación como colectividad amenazada por la dominación externa y sus consecuencias internas y el Estado como agente de cambio, pero también de expresión y defensa de la unidad nacional” (p. 331).

³ Aunque en el proceso venezolano de 1945-1948 se destaca la carismática figura de Rómulo Betancourt, ella está mediada por la presencia de un partido fuertemente implantado en todo el territorio y dotado de una dirección colectiva que contribuye a atenuar la identificación de las masas con un líder único y la transfiere al partido.

⁴ Aunque la figura de Betancourt fue crucial en el establecimiento de la dinámica política que se instala en el país después de octubre, la presencia y el papel del partido fue de primera magnitud. En esto la experiencia del trienio se acerca a otras experiencias populistas Latinoamericanas de la época: si se acerca a otras experiencias populistas Latinoamericanas de la época: si bien estas contaron con fuertes liderazgos personalistas como en el caso de Perón en Argentina en su seno también se crearon organizaciones políticas intermedias como los partidos y los sindicatos decisivos para entender las relaciones Estado-sociedad en este período histórico.

democrático, traspasar barretas sociales gracias al pasaporte de su pertenencia al partido. Ya en los años posteriores a 1958, abundarán los sindicalistas empresarios, los empresarios dirigentes del partido, los campesinos convertidos en hacendados, y así sucesivamente.

Pero, una vez desplazada la “oligarquía”, ¿cómo se concreta el modelo de desarrollo “revolucionario” que garantizará la integración de todos los grupos en el sistema de distribución de la riqueza petrolera?

Es aquí donde se perciben los límites del término “revolución” aplicado al proceso octubrista. En efecto, las políticas económicas y sociales del trienio 1945-48 difieren de las anteriores más en términos cuantitativos y retóricas que conceptuales. A pesar del lenguaje radical, que enfatiza el enfrentamiento y la amenaza a las clases propietarias, y especialmente a los “latifundistas”, los planes de desarrollo se orientan a distribuir recursos de origen petrolero a los diferentes estratos sociales, justificando esta distribución en términos de los aportes que estos grupos puedan hacer al desarrollo. Así por ejemplo, los créditos blandos a la producción agrícola e industrial, los subsidios y regulaciones de precios de los alimentos y otros productos básicos, la política arancelaria proteccionista y la construcción de infraestructura son líneas programáticas que de hecho practicaban los gobiernos de la transición postgomecista en menor escala, por disponer de recursos más escasos. Pero estas acciones han adquirido un significado distinto al ser expresadas como parte de una “revolución”; ello les permite insertarse en una articulación de sentidos que les posibilita ir más allá de la normal actividad de fomento de un Estado liberal. Y al mismo tiempo, ayuda a justificar el sesgo particularista y clientelista que en muchos casos tiene la mencionada distribución. En lugar de favorecer a la inepta y corrupta “oligarquía”, sustento del régimen anterior, se está contribuyendo a crear y fortalecer un conjunto de actores modernos, dispuestos a moderar la maximización de sus intereses inmediatos en nombre del desarrollo nacional. El natural desgaste producido por el poder fue atenuado por la fuerte identificación de las mayorías con el partido, quien les había otorgado el acceso al voto y la inserción simbólica en el poder; por otra parte, la inmensa capacidad distributiva del Estado fue plenamente utilizada para crear y reforzar las clientelas nacionales, regionales y locales.

Sin embargo este proyecto, que tenía todo para ser exitoso, fracasó políticamente apenas tres años después de llegar al poder, a pesar de no haber perdido el apoyo de las mayorías. Las razones de este fracaso pueden arrojar luz sobre procesos históricos más recientes. La retórica de Acción Democrática exigía renovar permanentemente el recuerdo de la ruptura generadora del régimen, como media para justificar su permanencia en el poder; ello le impedía establecer lazos que viabilizaran la conciliación con los antiguos rivales, a los cuales se había excluido totalmente, no sólo en el plano político, sino en el cívico, ya que se había acusado de corrupción, y juzgado en tribunales especiales, a la gran mayoría de los altos funcionarios del antiguo régimen. Asimismo, la relación con los socios militares del golpe se fue deteriorando, entre otras razones por las rivalidades internas que producía en ese sector la muy visible participación política de militares activos y la intervención partidista en las Fuerzas Armadas. Otro factor debilitante fue el enfrentamiento del régimen con la Iglesia, por su insistencia en establecer un mayor control del Estado sobre la educación privada, que se entonces predominantemente católica. Finalmente, la escasa experiencia de los cuadros de Acción Democrática en labores de gobierno se reflejó en una general ineficiencia del Estado y sus servicios.

Pero todos estos factores, si bien debilitaron la capacidad de gobierno de Acción Democrática y le impidieron resistir exitosamente al golpe de Estado que los desplazó del poder en noviembre de 1948, no pudieron frenar algunos cambios profundos en el sistema político, que se hicieron irreversibles en el largo plazo. El establecimiento del sufragio universal resume una nueva actitud ante la política, que deja de ser un asunto de elites restringidas; igualmente, las organizaciones sindicales y gremiales preexistentes adquieren legitimidad y pasan a formar parte de los actores políticos reconocidos; mientras tanto, las elites políticas del régimen anterior son desarticuladas junto con sus instituciones. El eje político-institucional de esta transformación fue la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en 1946 y redactora de la Constitución de 1947. La presencia, por primera vez en la historia del país, de genuinos representantes populares como legisladores, la participación de mujeres y de sindicalistas, la amplia difusión radial que tuvieron los debates, y la ampliación de los derechos políticos y sociales que aportó la nueva Constitución, contribuyeron a fijar en el imaginario colectivo la idea de una Asamblea Constituyente como instrumento de reivindicación popular y ampliación de la democracia.

El populismo atenuado posterior a 1958

Es muy conocido el proceso por el cual Acción Democrática y sus principales adversarios del período de 1945-48, desplazados por la dictadura militar, fueron gradualmente acercándose para construir un sistema que ha sido caracterizado como “populista de conciliación” (Rey, 1988). Este sistema pretendía fundarse sobre las bases modernizadoras y democráticas de la Constitución de 1947, pero contrabalanceando el peso que el sufragio daba al partido dominante con un conjunto de mecanismos de concertación y coalición. De esta manera, AD conservó buena parte de su retórica populista y de su programa nacionalista, antiimperialista e industrializador; más aún, este programa se fue convirtiendo en la base consensual que orientaba la estrategia de desarrollo del país, y era compartida con matices por el conjunto de actores sociales y políticos. De esta forma, el populismo de los años cuarenta cambió sus prácticas pero siguió operando como marco ideológico durante todo el período iniciado en 1958; no es casual que las violentas protestas de febrero de 1989 hayan coincidido con el inicio de medidas de ajuste y reestructuración que por primera vez rompían abiertamente con los supuestos distribucionistas del modelo populista de conciliación.

Este marco ideológico, que otorga al Estado un rol fundamental como eje de la reproducción de toda la sociedad, ha sido ampliamente estudiado en América Latina (Cavarozzi, 1994; Garretón, 1995), y tiene en el caso venezolano algunas particularidades que le dieron gran éxito en un momento y contribuyeron a su caída en otro.

El eje de la construcción del “populismo de conciliación” fue el logro de una forma de atenuar el conflicto político; así como la renta petrolera atenuaba el distributivo, el sistema de concertación entre elites permitía asignar distribuciones de esta renta por medio de negociaciones y diversas formas institucionalizadas de participación en la toma de decisiones. Ello se logra reconociendo a los partidos políticos, y especialmente a los dos de centro, AD y COPEI, el rol de mediadores casi exclusivos entre todos los actores sociopolíticos. Y este rol es alcanzado por la alternancia en el ejercicio del gobierno, acompañado de coaliciones temporales y de acuerdos institucionales para el reparto de las posiciones claves⁵. Al ser los intermediarios inescapables del

⁵ AD ganó las dos primeras elecciones presidenciales del nuevo período democrático, en 1958 y 1963, y en estos dos períodos se produjeron coaliciones formales entre los principales partidos. Desde 1968, se produce la alternancia entre

proceso de distribución de la renta, fueron alcanzando un poder muy superior al que tienen los partidos en un sistema político moderno. Los partidos penetraron, cuando no crearon directamente, sindicatos y gremios, que regularmente escogían a sus directivos entre listas presentadas abiertamente por aquellos. Hasta instituciones normalmente autónomas como la Iglesia, los gremios empresariales y las Fuerzas Armadas fueron penetradas, con mayor o menor éxito, por las orientaciones partidistas.

Este sistema se fue fortaleciendo por la concentración del voto en las dos opciones de centro y por el carácter presidencialista de; sistema, que daban amplia libertad a las autoridades del Estado y del partido para concertar su acción o procesar sus diferencias alejados del examen público. Ello terminó por favorecer una “privatización de hecho” de los partidos (Crisp y Levino, 1998). Crisis del rentismo y del modelo hegemónico (1989-1998)

Crisis del rentismo y del modelo hegemónico (1989-1998)

Los signos de debilidad del sistema se multiplicaron en las últimas dos décadas, acentuándose con sacudidas importantes como los motines de febrero de 1989 y los intentos de golpe de Estado de 1992 (Gómez Calcaño, 1992-1995; Álvarez et al, 1996; Salamanca, 1993, 1997; Kormblith, 1998). Los efectos a largo plazo del modelo de desarrollo centrado en la renta petrolera y su agotamiento, son el telón de fondo que explica algunas precondiciones de estos cambios.

Las instituciones sociopolíticas que habían tenido gran éxito durante la fase del rentismo petrolero se fueron deteriorando en varios ámbitos. Las tasas de crecimiento económico han sido inestables y dependientes de los cambios en los precios del petróleo. La inversión privada interna sufre un largo período de estancamiento, y la externa ha oscilado fuertemente como consecuencia de los cambios en las políticas económicas y los frecuentes episodios de inestabilidad ocurridos en la última década. El desempleo abierto, la informalidad y la pobreza han venido aumentando, sin que sucesivos programas de ajuste y planes económicos hayan logrado restablecer las bases para un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, las instituciones centralizadas responsables de las políticas sociales, como los ministerios de salud o educación y el seguro social, fueron decayendo, como consecuencia de prácticas clientelistas y corruptas, pero también de su atraso organizacional y su incapacidad para adaptarse a los cambios económicos y sociales de los noventa. Aunque la descomposición fue gradual, para fines de los noventa convergieron las tensiones de las diferentes esferas sociales, adquiriendo la forma de un cuestionamiento creciente al sistema político predominante. La articulación entre los diagnósticos críticos en lo económico, social y político produjo un modelo ideológico de explicación de la crisis y proposiciones de cambio, que caracterizaba a la sociedad venezolana como un conjunto de víctimas pasivas de una clase política corrupta.

Este malestar afectó también a las Fuerzas Armadas, que resentían la creciente intromisión de los partidos en la vida interna, y especialmente en el mecanismo de los ascensos.

AD y COPEI hasta 1988, año en el que repite AD dando acceso a la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Desde 1969 funcionó casi ininterrumpidamente el “pacto institucional”, que repartía entre los dos o tres partidos principales la directiva del Congreso, el poder judicial y otros poderes públicos.

Es en este contexto que surge el grupo denominado “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200”, animado por jóvenes oficiales, en 1983, año bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar⁶. Uno de sus principales líderes, Hugo Chávez, se había destacado en su carrera por sus posiciones de nacionalismo extremo y cierto liderazgo natural. El pequeño grupo que inicialmente se planteaba un regreso a principios morales y nacionalistas de contenido popular, fue madurando la idea de un golpe de Estado en la medida en que se intensificaba la visibilidad de la corrupción dentro y fuera de las Fuerzas Armadas y aumentaba el desprestigio de la clase política.

Después de varios años de tejer complicidades y eludir la vigilancia de los cuerpos de seguridad, el golpe finalmente se produjo el 4 de febrero de 1992. Aunque en algunas ciudades importantes los conjurados lograron sus objetivos, fracasaron en el escenario más importante, la capital. A pesar de su derrota militar, el intento de Chávez despertó una oleada de simpatía en amplios sectores de la población. Al asumir la responsabilidad por el golpe y prometer que sólo “por ahora” había sido derrotado, pareció ocupar un espacio que el liderazgo político tradicional había dejado vacío: el del dirigente que se comunica directamente con el pueblo, asume sus errores y no evade responsabilidades. Al mismo tiempo, se presentaba como un actor radicalmente diferente de todos los que habían ocupado el centro de la escena política en los años anteriores. Y finalmente, al ofrecer una solución radical e instantánea a los problemas que afectaban a la población, se convirtió en el foco de esperanzas mesiánicas centradas en el regreso a un modelo socio-político de distribución amplia e inclinado a la exaltación de los sectores populares.

En sus dos años de prisión, el comandante y sus seguidores más inmediatos intentaron repetir la vía conspirativa, se asociaron a una segunda rebelión, esta vez conducida por generales de varias fuerzas, que también fracasó, en noviembre de 1992. Mientras tanto, la victoria de Rafael Caldera⁷ en las elecciones presidenciales de 1993, apoyada parcialmente en la justificación velada que había dado éste a la intentona de Chávez, creó un clima más favorable a los ex golpistas. Una de las primeras acciones del Presidente fue negociar con los prisioneros para suspender el juicio en su contra a cambio de que éstos aceptaran retirarse definitivamente de la carrera militar. Gradualmente, los ex golpistas fueron acercándose a la idea de participar en la lucha electoral; el primero en arriesgarse, ante la fuerte desaprobación de Chávez, fue el comandante Arias Cárdenas, quien compitió exitosamente en 1995 por la Gobernación del Estado Zulia, el de mayor población del país, y en el que Arias había sido el responsable de la insurrección de febrero de 1992 (López Maya, 1996; Blanco Muñoz, 1998, pp. 309-314). A pesar de conflictos internos y divisiones, el movimiento decidió, en abril de 1997, lanzar la candidatura de Chávez a las elecciones presidenciales de 1998 (Blanco Muñoz, 1998, pp. 404-412). A ese fin, se creó una organización política paralela: el Movimiento Quinta República o MVR. Más que un simple cambio de gobierno, Chávez prometía una recomposición radical del sistema político, bajo el supuesto básico de que tal recomposición sólo era posible con un desplazamiento total de los liderazgos tradicionales, y especialmente los de AD y COPEI.

⁶ El libertador ha estado presente siempre, unas veces con más fuerza, otras con menos, en los proyectos políticos venezolanos. A partir de su figura como padre de la patria, se han intentado legitimar simbólicamente distintos liderazgos políticos en diferentes épocas. Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras destacan en este sentido. A nuestro juicio, con Chávez la utilización del mito bolivariano a fines de sembrar un ideario político en la población alcanza una de sus mejores expresiones en la historia política de Venezuela.

⁷ Rafael Caldera, líder fundamental de la democracia cristiana en Venezuela y fundador del partido Copei, ejerció la presidencia de la República entre 1969 y 1974 y, después de romper con su partido, entre 1994 y 1999.

La “Revolución” Bolivariana

En diciembre de 1998 Chávez obtuvo una victoria contundente, a pesar del intento de última hora de los partidos tradicionales de apoyar a su principal rival.

En su discurso de toma de posesión el 2 de febrero de 1999, el Presidente Chávez anunció que ese mismo día iba a emitir un decreto llamando al pueblo a pronunciarse sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Después de numerosos avatares, que incluyeron batallas judiciales y de opinión pública durante los primeros meses de gobierno, se produjo la elección de la Asamblea, en la cual el movimiento favorable al Presidente obtuvo una mayoría aplastante. Uno de los resultados de esta elección es la presencia simultánea y paradójica de dos principios, el de la concentración del poder en una formación política y el personalista: nunca en la democracia venezolana, ni siquiera en 1947, un partido había logrado una mayoría tan grande en el órgano legislativo estratégico. Y al mismo tiempo, nunca (al menos desde 1936) un partido había dependido tanto de la voluntad de una sola persona, es decir, nunca había sido menos parecido a lo que se supone es un partido moderno (Gómez Calcaño y Patruyo, 2000).

Esta especial situación política se tradujo en que la Asamblea logró situarse como cuerpo más legítimo que el Congreso elegido en 1998, al cual primero limitó en sus funciones y luego clausuró, encontrando una muy débil resistencia de los partidos del régimen anterior; igualmente fue primero ignorada y después disuelta la Corte Suprema de Justicia, con lo cual desapareció de hecho la separación entre poderes autónomos. Es en este período que llega a su cenit la concentración de poder y el apoyo popular del nuevo régimen.

Especialmente durante la primera discusión del proyecto de Constitución, a partir de agosto de 1999, se constató la atención apasionada que la opinión pública daba a los temas centrales de la misma; los medios de comunicación abrieron sus páginas al debate, y se manifestó una diversidad de ideas y propuestas sorprendente, incluso en las filas de la fracción gubernamental.

Sin embargo, entre la primera y segunda discusión del proyecto, algo cambió. En primer lugar, vino la exigencia, la orden casi, proveniente del Ejecutivo, de acelerar la discusión para completar el nuevo texto legal en menos de tres meses, sin que hubiera una clara justificación técnica ni institucional para ello. En segundo lugar, se fue implantando el ejercicio de una mayoría mecánica que aprobaba cambios fundamentales, muchas veces sin saber a favor de qué estaba votando. Y finalmente, una combinación de injerencia directa del Ejecutivo en las discusiones de la Asamblea y de intimidación hacia quienes difirieran de la mayoría terminó produciendo un texto constitucional que, si bien contiene importantes avances en materia de reconocimiento de derechos cívicos y sociales, también muestra claras tendencias al presidencialismo y la concentración del poder.

Las disposiciones tomadas por la Asamblea a fines de diciembre de 1999, cuando la atención de la opinión pública se centraba en las catástrofes naturales, constituyen otra señal peligrosa: para cubrir el período de transición hasta las elecciones previstas para el 28 de mayo de 2000, la Asamblea designó a un cuerpo legislativo, la Comisión Legislativa Nacional, formado por algunos constituyentes y otros miembros designados por la misma Asamblea, pero no elegidos. Igualmente designó a un nuevo Tribunal Supremo, Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo y

Consejo Nacional Electoral. Todos estos nombramientos fueron hechos sin debate público ni participación de actores políticos o sociales distintos a los del gobierno, con lo cual se institucionalizó, al menos por un período transitorio, la concentración del poder en un solo sector político.

La debilidad de las organizaciones políticas, tanto del gobierno como de la oposición, se refleja en los debates de opinión pública, en los cuales el Presidente asume personalmente la defensa de su gobierno. En sus apariciones mediáticas, el Presidente combina la atención detallada a las demandas con fuertes ataques a sus adversarios, en un estilo que destaca su identificación personal con los sectores populares. En su permanente confrontación con una oposición debilitada y desprestigiado, el Presidente encuentra una fuente de renovación de su legitimidad, a pesar de las fuertes dificultades económicas por las que atraviesa el país.

El peso de la coyuntura crítica: primeras medidas económicas y sociales

Las ideas muy generales que expresaban el programa de gobierno de Chávez se confrontaron, al iniciarse el gobierno, con una grave crisis en varios aspectos de la economía y la sociedad: la caída del ingreso externo como consecuencia de los bajos precios del petróleo y de otras exportaciones como el acero y el aluminio, el estancamiento de la economía con su secuela de desempleo, y el grave déficit fiscal.

Las primeras medidas del gobierno se dirigieron a enfrentar el déficit fiscal. Este conjunto de medidas económicas, así como algunas de reorganización de la administración pública, fue presentado al Congreso en solicitud de una Ley Habilitante que permitiera al Ejecutivo proceder con celeridad a tomar las acciones más urgentes⁸. Las medidas más importantes se centran en el ámbito tributario. Se reforma la ley de impuesto sobre la renta; se sustituye el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor por un Impuesto General a las Ventas, lo que debe permitir una mayor base de tribulación y una ligera disminución de la tasa impositiva. Temporalmente se impone un impuesto del 0,5% a las transacciones financieras, como una forma de aliviar el déficit de caja del gobierno.

Dos de las medidas más importantes son la proposición de una Ley de protección de inversiones, que proporcione la seguridad jurídica que los inversionistas han venido demandando, y una Ley para el refinanciamiento de la deuda externa (El Universal Digital, 18-1-1999). Paralelamente, se habían iniciado conversaciones preliminares con el BID, el BM y el FMI para la obtención o renegociación de préstamos (El Universal, 6-2-1999, p. 2-1).

Los dilemas entre la oferta redistributiva del candidato y las realidades económicas que enfrentaba el Presidente se hicieron manifiestos cuando éste anunció un aumento del salario de los trabajadores del sector público del 20% para los salarios más bajos, y dejó los eventuales aumentos en el sector privado a la negociación directa entre empresarios y trabajadores. Esta medida representó un viraje frente a promesas o expectativas de amplios sectores populares, que habían

⁸ Las leyes habilitantes, que han sido concedidas a varios presidentes en los últimos años, permiten al Ejecutivo legislar sobre determinados temas específicos, limitados al ámbito económico financiero, durante un período limitado.

esperado, basándose en las ofertas del Presidente durante la campaña electoral, un ajuste general de salarios mucho mayor⁹. Sin embargo, la medida no provocó reacciones inmediatas organizadas en su contra, en parte por el gran desprestigio y debilidad en que ha caído el sindicalismo tradicional, minado por la corrupción y falta de representatividad; y en parte también por un amplio margen de confianza que todavía parecen otorgar los sectores populares al Presidente.

Frente a las indefiniciones de la política estatal, algunos voceros empresariales y políticos reclamaban que no existía un verdadero programa económico del gobierno, un plan coherente de recuperación frente a problemas urgentes como la recesión económica y el desempleo.

Enfrentando esas críticas, el gobierno presentó al país el “Programa Económico de Transición 1999-2000”, diseñado por CORDIPLAN¹⁰ (CORDIPLAN, 1999). El mismo muestra aspectos doctrinales aparentemente heterodoxos combinados con políticas concretas más conservadoras. Por una parte, se propone:

“...una organización social de la producción, en la que el mercado como mecanismo fundamental de la asignación de recursos y factores, incorpore formas organizativas complementarias de propiedad privada [...] como el cooperativismo y las asociaciones estratégicas de consumidores y productores...” (Ibid).

En cuanto a las medidas específicas para la etapa de transición, contempla un ajuste fiscal severo que considera necesario para sentar las bases de un crecimiento posterior. Ello requiere reformas tributarias para mejorar la recaudación y un estricto control del gasto público, que exigirá

“...una reorganización profunda de la administración central y descentralizada, combatiendo lo superfluo, lo ineficiente y el excedente en bienes, servicios o personal que fuere necesario [...] independientemente del impacto a los intereses gremiales o sindicales que sean afectados” (Cordiplan, 1999).

Asimismo se plantea una reducción de las transferencias directas e indirectas y una mejor focalización de los programas sociales hacia los sectores más vulnerables; tratar de lograr un autofinanciamiento del sistema de seguridad social o al menos reducir su dependencia respecto al presupuesto; revisar las asignaciones legales contractuales para dar mayor flexibilidad al gasto público; contener estrictamente el endeudamiento público; reducir al mínimo los subsidios en los precios y tarifas de los servicios públicos. En el campo monetario, se plantea proseguir una política restrictiva, así como procurar el descenso de las tasas de interés y la creación de incentivos financieros y fiscales a las actividades productivas. También se plantea continuar la política de privatizaciones en los sectores eléctricos y del aluminio, y continuar la política de apertura petrolera con ciertas modificaciones dirigidas a favorecer al capital nacional.

⁹ El salario mínimo en Venezuela, después del aumento mencionado, es de aproximadamente 192 dólares, mientras que la cesta alimentaria básica es calculada por los organismos oficiales en aproximadamente 220 dólares, y por organizaciones privadas en casi el doble de esa cifra.

¹⁰ Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, designado a partir de septiembre de 1999 Ministerio de Planificación y Desarrollo.

En el curso del año 1999, la situación fiscal cambió radicalmente al producirse un sostenido aumento de los precios del petróleo: el valor de las exportaciones petroleras aumentó un 37%, concepto por el cual ingresaron 16.627 millones de dólares (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2000:15) Sin embargo, este flujo de recursos no se convirtió automáticamente en un aumento de la prosperidad. De acuerdo a un informe del Banco Central de Venezuela, reportado por el diario El Nacional:

“..., la caída del PIB total para este año se estima en 7,2%, significativamente superior a la de 1998 cuando alcanzó 0, 1 %. ... el sector petrolero se contrajo en 6,8%, contrastando con el crecimiento de 1,7% registrado en 1998, mientras que en el sector no petrolero la caída se profundizó pasando de 1,2% en 1998 a 6,9% La contracción del aparato productivo también se ha visto acompañada por un incremento en la tasa de desempleo y de la informalidad, para ubicarse a finales del tercer trimestre en 15,6% y 51,7% respectivamente, cifras récord en la historia estadística de Venezuela” (El Nacional, 6-1 -2000).

Frente a estos resultados, el gobierno reajustó parcialmente su programa económico, pero sin cambiar las estrategias fundamentales. Esta actualización se puede observar en el “Programa Económico Año 2000”, publicado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo en marzo de este año. El énfasis central de este programa está en:

“...las políticas dirigidas a promover la oferta y la inversión privada, fundamentalmente a través de la implementación de incentivos fiscales y de la inversión pública en infraestructura, así como de reformas legales orientadas a establecer un entorno macroeconómico y un marco institucional, estables y favorables a la actividad económica” (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2000: 20).

Las políticas monetaria y fiscal enfatizan la estabilidad y la prioridad de la inversión sobre el gasto corriente, para lo cual se prevé “la reducción de instituciones, reestructuración de organismos, cambios en las pautas de contratación, eliminación o simplificación de procedimientos...” (Ibid., p.23). También se pretende aumentar los gastos en educación, salud y seguridad social, centralizando los programas sociales en el Fondo Único Social. Para mantener la credibilidad externa del gobierno, se mantiene la idea de honrar todos los compromisos de deuda externa, tal como se ha venido haciendo.

El problema del desempleo, que ha sido uno de los más graves de la reciente coyuntura económica y social, encuentra dos tipos de tratamiento: uno general y otro coyuntural. En el primer sentido, se afirma que

“... la expansión del empleo está vinculada al crecimiento económico y a la creación de condiciones atractivas para la inversión privada. En tal sentido, las expectativas de crecimiento y la estabilidad en los precios claves de la economía, salarios, tipo de cambio y tasas de interés para el año 2000, conducirán a un incremento de la absorción de mano de obra...” (Ibid., p. 29).

En el plano coyuntural, se plantea un plan de empleo rápido en obras de infraestructura y el estímulo al sector de la construcción.

En el plano de las reformas estructurales, se concreta la actitud favorable a la entrada de capital privado en el sector productivo estatal, principalmente en el aluminio, donde se plantean asociaciones estratégicas con diferentes grados de participación de capital privado, que en algunos casos llega a obtener la mayoría accionarla (Ibid., pp. 30-33). Aunque se depositan grandes expectativas en la reforma del sistema de Seguridad Social, por su potencial aporte de recursos para la inversión a largo plazo, se deja en manos del poder legislativo las características de esa reforma. En este aspecto puede observarse la tensión entre quienes, en el sector gubernamental, se inclinan - hacia mantener un sistema de seguridad social totalmente público, y quienes aceptan la participación en el mismo de fondos de pensiones privados. Es probable que estas tensiones sólo puedan ser resueltas después de las elecciones de julio.

En los sectores petróleo, gas y petroquímica se mantienen las políticas de apertura desarrolladas en el período gubernamental anterior (a pesar de los ataques verbales que frecuentemente se han lanzado contra ella, y contra la “globalización” en general). De esta forma, en el sector petrolero, las inversiones del Estado ascienden a 2.959 MM\$, mientras las de terceros montan a 4.471 MM\$. En el sector gas, la proporción es de 85 MM\$ del Estado y 222 MM\$ de terceros (Ibid., pp. 35-48) En petroquímica, aunque no se especifican los montos respectivos, se plantea que “el crecimiento del sector estará fundamentado en una máxima participación del sector privado nacional e internacional” (Ibid., p. 50). En la política minera, se plantea promover la inversión privada nacional y extranjera y se establece un conjunto de incentivos al inversionista privado, que incluyen la eliminación de algunos impuestos y la exoneración temporal de otros (Ibid., pp. 52-55). En otros sectores con potencial para un amplio crecimiento, como eléctrico y comunicaciones, también se han dado señales favorables a una mayor participación del capital privado. La reciente adquisición de la empresa eléctrica privada más grande del país (hasta entonces controlada por capitales nacionales), a través de una oferta pública hostil de la empresa norteamericana AES, no fue objetada por el gobierno, ya que más bien es consistente con la nueva regulación del sector y los planes de privatización que se adelantan para las empresas eléctricas todavía en manos del Estado¹¹. Igualmente, la nueva Ley de Telecomunicaciones ratifica el carácter privado de este sector, a pesar de mantener una rectoría del Estado y un cierto poder de intervención en el mismo.

Es fácil apreciar en este conjunto de orientaciones económicas la influencia de programas ortodoxos que se han venido aplicando en los últimos años, tanto en Venezuela como en otros países de la región, bajo la vigilancia de organismos internacionales. En las proposiciones de los planificadores del gobierno se disuelve buena parte de la retórica nacionalista y aparentemente anticapitalista del Presidente y sus seguidores, y se está lejos, en la práctica, de la condena verbal al “neoliberalismo salvaje”.

Un análisis de las medidas del gobierno en su período inicial muestra un intento por satisfacer las demandas contradictorias de diferentes sectores: por una parte, los que esperan una

¹¹ Así lo reconocía un representante de la empresa AES: “el vicepresidente de AES para América del Sur, Jeffery A. Safford, destacó que la aprobación de la ley [Ministerio de Energía y Minas], fueron las razones que les llevaron a decidir la compra del Grupo... Safford anunció que la empresa que representa está interesada en establecer asociaciones estratégicas con el Estado en las empresas Energía Eléctrica de Venezuela, Energía Eléctrica de Barquisimeto y Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro, siempre y cuando se establezca que el inversionista privado puede detentar la mayoría accionaria” (El Nacional, 3-5-2000).

acción redistributiva, que materialice las esperanzas de inclusión y justicia social despertadas por el Presidente en su campaña electoral. Y por la otra, la de los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, de quienes depende la inversión necesaria para reactivar la economía. En los largos años de la bonanza petrolera, el papel del capital privado en el crecimiento económico era minúsculo comparado con los inmensos recursos del Estado. Era la política de inversión estatal, directa o indirecta, la que determinaba la dirección de la economía. A pesar de ello, el Estado económicamente poderoso protegía, estimulaba y hasta privilegiaba la acumulación privada de capital, siempre que ella no invadiera ciertas zonas reservadas al sector público, como el petróleo y las industrias básicas. Paradójicamente, ahora que la conducción del Estado pasa a manos que, aparentemente, desconfían del mercado y de la globalización, y que dicen querer restablecer el rol preeminente de aquél en la regulación de la vida económica y social, es cuando parecen reconocerse en la práctica los límites de su capacidad para asumir las inversiones necesarias para la reactivación de la economía, a pesar del aumento significativo del ingreso petrolero.

Relegitimación y ruptura política

Una de las disposiciones derivadas de la Constitución de 1999 fue la relegitimación de todos los poderes, que consistió básicamente en convocar a elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes y de todos los cuerpos legislativos, desde el nivel nacional hasta el local. El Presidente y sus seguidores esperaban que el resultado de esas elecciones le sería ampliamente favorable, lo cual les permitiría avanzar en sus objetivos políticos y económicos con más rapidez. Sin embargo, las dificultades del gobierno para enfrentar la difícil situación económica, y especialmente el desempleo, las tensiones internas en el núcleo de comandantes que habían encabezado la rebelión de 1992, y finalmente la preferencia de Chávez por un pequeño grupo de asesores políticos encabezados por Luis Miquilena, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, desembocaron en una ruptura con Francisco Arias Cárdenas y otros de los comandantes. Sorpresivamente, Arias lanzó su candidatura presidencial en marzo de 2000, constituyéndose en un rival de cierta significación, lo cual no había logrado ninguna de las demás figuras opositoras¹².

La principal consecuencia de esta ruptura es que el conjunto de actores con aspiraciones hegemónicas, que logró grandes éxitos durante el año 1999 al barrer con los opositores y con los obstáculos institucionales que se le enfrentaron, ya no es un bloque homogéneo. Aunque el Presidente sigue siendo el líder reconocido mayoritariamente por quienes se identifican con los cambios producidos, la denominación “chavismo” resulta hoy estrecha para el proyecto de quienes insurgieron en 1992 y los que se le han ido agregando. Reconocido ya el carácter irreversible de las transformaciones institucionales, consagradas en la Constitución aprobada en 1999, se abre en el interior del nuevo campo político una diversidad de actores, conflictos y debates que ya no puede agotarse en el dilema entre el “chavismo” y las “cúpulas podridas de partidos tradicionales”.

Este nuevo escenario pudiera complicar el proyecto original de Chávez, el cual parece enfriarse hacia una transición de contenido populista con fuerte acento militarista, combinando elementos de las versiones clásicas del populismo con expresiones más novedosas del mismo que en

¹² En las elecciones presidenciales del 30 de julio de 2000, Chávez obtuvo un 57% (porcentaje similar al de su victoria de 1999), y Arias Cárdenas un 37%.

algunos países de la región han logrado combinar con relativo éxito fórmulas liberales con prácticas distributivistas dirigidas a los sectores populares.

¿Una transición populista?

A raíz del retorno al poder en la región de una serie de liderazgos mesiánicos, en la perspectiva de lo que Zermeño (1989) nombró como “el regreso del líder”, -Menem, Fujimori- con un estilo de ejercicio de política semejante a los líderes populistas históricos -Perón, Vargas- o concepto populismo se ha vuelto a instalar en la discusión y análisis político, esta vez precedido del prefijo neo¹³. El término neopopulismo entonces ha servido en los últimos años para dar cuenta de las nuevas experiencias de relacionamiento con las masas populares que un buen número de aspirantes al gobierno o gobernantes en ejercicio han desplegado amparados en la fuerza de su personalidad carismática.

Sin embargo, no pocos analistas del fenómeno han advertido sobre la necesidad de cautela que debe tenerse a la hora de echar mano de este concepto, toda vez que el mismo intenta comprender un fenómeno que en mucho es distinto al original. Así, bastaría con detenernos en los distintos contextos donde se producen las experiencias tradicionales de corte populista y las más recientes, para darnos cuenta de que estamos en presencia de políticas diferentes, con contenidos diferentes e incluso recursos de aproximación a las masas, distintos.

Mientras que las versiones tradicionales de populismo se enmarcaban en la crisis de las formas oligárquicas de dominación y el arribo de sectores sociales movilizados, hasta ese momento excluidos, las expresiones más recientes se producen mediadas por contextos en los cuales los sistemas políticos han colapsado, los sujetos populares han sufrido un intenso proceso de fragmentación y la pobreza se ha extendido y profundizado en una amplia franja de la población. Para decirlo en pocas palabras, si las expresiones históricas del populismo en la región florecieron en condiciones de transición hacia la modernización, las que estamos presenciando en este momento parecieran conectarse con el agotamiento de ese proceso (Oxhorn, 1998).

Zermeño (1989), ha señalado que América Latina vive un “doble desorden”. El primero, consecuencia del “impacto modernizador en la urbanización, en la industrialización, sobre una matriz social en ocasiones completamente ajena al medio europeo que sirvió de cuna al industrialismo; resultado: explosión demográfica, urbanización salvaje, degradación ecológica...” (p.

¹³ Kenneth Roberts (1998) intenta una síntesis del concepto a partir de cinco rasgos que permiten compensar parcialmente el déficit teórico y empírico que impide capturar en toda su multidimensionalidad el fenómeno populista. Estos son:

a-Un modelo personalista y paternalista, no obligatoriamente carismático de liderazgo.

b-Una coalición política policlasista, concentrada en los sectores sociales subordinados.

c-Un proceso de movilización política de arriba hacia abajo, que salta los mecanismos institucionalizados de mediación o los sujeta a vínculos directos entre el líder y el pueblo.

d-Una ideología amorfa o ecléctica, expresada en un discurso que enaltece los sectores subalternos o es antielitista.

e-Un proyecto económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas masivamente difundidos a fin de construir una base material para obtener respaldo del sector popular.

123). El segundo, más “brutal” porque, “una vez instalada en esta lógica de alto dinamismo, América Latina sin la menor previsión se impacta contra el muro del estancamiento” (Idem).

En ambos momentos el Estado asume un papel clave al centralizar o pretender hacerlo, la dinámica de la sociedad. Si en el primero el Estado actúa como agente que motoriza la transición al viabilizar el proceso de desarrollo en todas sus esferas, en el segundo, la sociedad segmentada y desarticulada, sin organizaciones asociativas intermedias “delega su unidad a la institución estatal y está inermemente frente a ella” (Zermeño, P. 139). Así las cosas, el Estado se encuentra “libre para manipular a la población sin que nada amenace su independencia; todavía más, tenderá a ganar mayor autonomía profundizando la atomización de la sociedad” (Idem).

En condiciones como éstas, la personificación de la unidad a partir de la cual se produce una suerte de reconciliación imaginaria de lo fragmentado, se condensa en el líder, en aquel que “hablando en nombre de la Ley y de la nación, se presenta a la mirada de la multitud como su encarnación. La figura carismática del jefe populista no es ornamental. Es aquello por lo que puede operarse, a falta de síntesis, una fusión por la cual, saliendo de su 'desamparo', el pueblo se incorpora la identidad del jefe” (Pécaut, 1987:252) (Traducción nuestra).

Pero, a pesar de que la figura de líder carismático es crucial en ambos momentos, los populismos recientes adoptan políticas económicas distintas. Si en el pasado, aquellos regímenes se caracterizan por un divorcio de las formas económicas liberales haciendo descansar en el Estado el control de la economía, en el presente asistimos a una especie de reconciliación del populismo con el liberalismo (Novaro, 1998; Roberts, 1998) que explica la coexistencia de prácticas populistas en el terreno de lo social con medidas de políticas económicas de corte neoliberal. En este sentido, podemos afirmar que la centralidad del Estado al abrigo de un líder carismático constituye al tiempo que una respuesta frente al “desamparo” y la pobreza que han ocasionado las medidas de ajuste, una necesidad de esas mismas políticas para poder ejecutarse, en tanto que requieren de cierta unidad de acción y, sobre todo, de altas dosis de persuasión sólo posibles de asimilar si emanan del líder providencial.

La Argentina de Menem y el Perú de Fujimori son dos casos emblemáticos que hablan de este fenómeno. En el primero una redefinición de las alianzas sociales que incluyó los sectores económicos con los cuales el peronismo tradicional se confrontó históricamente, despertó confianza y permitió superar la “brecha de credibilidad que se abría entre el gobierno peronista y los sectores económicos predominantes, pero también en un sentido más amplio, entre aquel y la sociedad” (Novaro, 1998:39). En el segundo, un discurso antielitista y antiestablishment no apuntaba, sin embargo a la oligarquía económica sino más bien a las elites políticas y los órganos institucionales donde anclaba su poder: los partidos, el Congreso y las instancias judiciales (Roberts, 1998).

En los dos casos, tanto Menem como Fujimori, despliegan una acción de gobierno montada sobre su carisma personal, diluyendo las representaciones políticas intermedias al asumir el contacto directo con la población bien sea a través de los medios, en la calle, o combinando ambos. Pero, lo que más nos importa en este sentido es como tanto Menem como Fujimori han implementado medidas económicas de corte neoliberal con dosis comparativamente bajas (en contraste con otros países de la región) de conflictividad social, interpellando a las masas con un discurso genuinamente

populista. De allí que, tal como indica Roberts para el caso peruano¹⁴, queda demostrado “como se pueden incorporar medidas económicas populistas a un proyecto neoliberal global y cómo los programas de privatización, elementos fundamentales del neoliberalismo, pueden producir fácilmente nuevos tipos de agendas populistas” (Roberts, 1998:399).

En Venezuela no estamos ciertos aún de qué se trata el fenómeno chavista y mucho menos en que desembocará. Recoge mucho, es cierto, de los populismos clásicos pero, no termina de cuajar una práctica que permita emparentado cómodamente con los neopopulismos de la región, aunque algunas señales ha mostrado ya que inducen a hacerlo.

La presentación de algunas claves de este fenómeno de la política venezolana en las páginas que siguen proporciona una compacta plataforma desde la cual es posible discutir sobre la naturaleza del chavismo y sus vínculos con el populismo como estilo de acción política.

La confrontación, siempre la confrontación

Uno de los rasgos típicos del populismo es su discurso confrontacional montado sobre códigos binarios tales como amigo-enemigo, honesto-deshonesto, patriotas-antipatriotas, los cuales nutren el antagonismo entre lo que se quiere extirpar o aniquilar y lo que se proclama como nuevo. (Laclau, 1987., Arenas y Gómez, 1999;) La política encuadrada en esa dicotomía es concebida entonces por el populismo no como actividad procesal, falible y necesaria, sino como apocalíptico necesidad restauradora (Mac Rae, 1969). Si algún rasgo caracteriza al chavismo es precisamente ese: su nunca bien satisfecha necesidad de enfrentar al “enemigo” por “traidor” y “corrupto” en nombre de la regeneración de la sociedad venezolana. Y acá es necesario hacer dos observaciones. En primer lugar que el lenguaje confrontacional chavista no ha sido abandonado después de haber asumido Chávez el gobierno con la mayoría de votación con que lo obtuvo y ni siquiera después de haber abatido a los bastiones del “puntofijismo”, los partidos tradicionales Acción Democrática y Copei, como los abatió. Va más allá y es capaz de enfrentar a organizaciones del Polo Patriótico, leales al liderazgo de Hugo Chávez. Es el caso del partido Patria Para Todos (PPT) algunos de cuyos líderes ha calificado de “inmorales” e “incapaces”. Pero el más conspicuo lenguaje antagónico lo ha exhibido Chávez y muchos de sus seguidores a raíz del deslinde que un significativo grupo de comandantes compañeros de Chávez en la “gesta” del 4 de febrero de 1992, hiciera el día en que se conmemoraron ocho años de la intentona golpista. El calificativo de “traidores” no se hizo esperar, generándose una matriz que ha prendido en una franja de la población más pobre llegándose incluso a agredir físicamente a Francisco Arias Cárdenas, el más connotado de los disidentes, en sus visitas a los barrios de Caracas con ocasión de su candidatura a la Presidencia de la República. A estos dos hechos deben sumársela los continuos ataques a los medios de comunicación, a periodistas, a la Iglesia y a los empresarios, a quienes ha achacado la responsabilidad de atajar el proceso de cambios que vive el país y ser enemigos, en consecuencia, de la “revolución bolivariana”.

¹⁴ En Perú, a raíz de los cuantiosos ingresos obtenidos por el gobierno gracias a la privatización de las compañías telefónicas y de telecomunicaciones, Fujimori pudo atender por vía de programas localizados a la población mas pobre del Perú.

Esta construcción de identidad y sujetos políticos basada en el careo fue sumamente útil a Chávez en el período de campana electoral pues, a los ojos del pueblo, el proyecto que éste encarnaba se ubicaba radicalmente en la acera de enfrente de las élites gobernantes. Los sucesivos comicios (cuatro en total) en el transcurso de año y medio de gestión, le han permitido al chavismo y a Chávez particularmente, mantener la táctica confrontacional en el marco de las distintas campañas electorales, con lo cual, a los ojos también de un denso pero minoritario sector de la sociedad, los sectores medios, el gobierno pierde el tiempo “peleando” y no “trabajando” como se esperaba. Así las cosas, la experiencia ecuatoriana con Abdalá Bucaram no deja de tentarnos a la hora de interrogarnos sobre el futuro del régimen chavista¹⁵. Tal como señala Burbano de Lara (1998), ese diseño de antagonías funcionó muy bien durante la campaña electoral de Bucaram; sin embargo, en el gobierno, “la construcción de la escena política en términos de dos campos antagónicos, excluyentes, no pudo mantenerse y legitimarse en una sociedad como la ecuatoriana actual, mucho más plural, diversa y desarticulada” (p. 19). Como bien observa Burbano en el mismo texto, “la sociedad es incapaz de organizar todos sus conflictos a partir de dos ejes básicos y una sola racionalidad” (Idem). De allí que la apelación sin pausa a este recurso puede comenzar a saturar a una parte de la población y probablemente, a perder su fuerza simbólica en el imaginario popular. El desastre causado por el fracaso en llevar a cabo la “megaelección”¹⁶ y las manifestaciones de descontento militar han rebajado ocasionalmente el discurso confrontacional, que sin embargo resurge a la menor ocasión. Esta posibilidad de debilitamiento estará abierta de continuar transitando la vía del conflicto.

Liderazgo carismático

Si en algún caso podemos constatar “el regreso del líder” es en el caso venezolano. Si en algo Venezuela ha resucitado el populismo más “radical”, tal como Steve Eliner (1997) caracterizó al desplegado por AD en el trienio 1945-1948, es en este momento a la sombra del gran caudillo¹⁷. Efectivamente, portador de un fuerte carisma y una gran habilidad discursiva, Chávez ha logrado establecer un vínculo con los sectores más pobres cuyo soporte se inscribe poderosamente en el plano de la emocionalidad sin que esto signifique obviamente que elementos de orden racional no estén presentes en el respaldo de ese vínculo. Invocando los próceres de la independencia y sobre todo al Libertador Simón Bolívar, exaltando hasta la “hipérbole histórica” (Briceño Iragorry, 1951)

¹⁵ Efectivamente, Bucaram articuló un discurso antioligárquico que mantuvo con vehemencia antes y después de tomado el poder. Chávez, por igual, ha fabricado un enemigo en la oligarquía (más imaginaria que real) cuando sentencia “oligarcas temblad” (citando una canción de la época de la guerra federal del siglo XIX); o cuando proclama frente a los restos del Libertador “no descansaremos hasta echar el último vestigio de la oligarquía” (El Nacional, 25-07-00).

¹⁶ Nos referimos al diferimiento de la fecha pautada para las elecciones (28 de mayo) ante la incapacidad técnica y organizativa del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros fueron impuestos “a dedo” Por la Asamblea Nacional Constituyente. Se les llamo megaelecciones porque a partir de ellas se elegirían los representantes de todos los poderes: Presidencia, Asamblea Nacional, Gobernaciones, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales con el fin de relegitarlos a la luz de la nueva Constitución.

¹⁷ Tendríamos que hacer la diferencia entre uno y otro, sin embargo; mientras que el primero se viabilizó gracias a la colosal disponibilidad por parte del Estado de una renta petrolera suficiente para atender a una población relativamente pequeña, carente de casi todo, el de Chávez tiene que vérselas con una disminución de las posibilidades del Estado de capturar renta en el mercado petrolero internacional en las mismas proporciones en que lo hacía antes y, sobre todo, con una población mayor y con niveles de demanda más complejas. De allí que podamos aventurarnos a decir que en este caso pudiéramos estar en presencia de prácticas populistas, menos efectivas en su papel redistribuidor y más efectivas en su presencia discursiva-simbólica, por lo menos hasta ahora.

su figura¹⁸, Chávez hace prevalecer el continente emocional combinando los elementos religiosos y heroicos con la promesa del edén (que por cierto se posterga hasta el cumplimiento de cada nuevo proceso electoral) para cuyo cumplimiento se siente y se muestra predestinado¹⁹. El caudillo es entonces una especie de “santo secularizado” como ha dicho Carlyle que con “sus cantos mágicos puede lograr hasta que la luna baje” (Cassirer: 334). Pero para que esto sea posible “no se necesita solamente un héroe, sino un mundo que le cuadre” (p. 226). Así, el mensaje “por ahora” dado por televisión a la población venezolana a pocas horas del frustrado golpe, por el Comandante Chávez, impactó emocionalmente a una sociedad desarticulada, desorientada y sobre todo hastiada del liderazgo tradicional. Tal como apunta Luis José Uzcátegui (1999), la sociedad en pleno sin diferencia de clases sociales, sintió un grato cosquilleo de aventura, ilusión, sorpresa, alegría, temor”(p. 7). De allí en adelante todo conspiró para que se fraguara inequívocamente el “regreso del líder”. La adhesión dogmática y la idealización absoluta hicieron al Comandante Chávez depositario de las más profundas esperanzas de redención de un amplio grupo de venezolanos.

Así, en abril de 1999, a dos meses de gobierno, las encuestas registraban un 84% de popularidad para el flamante Presidente²⁰. Hoy sigue manteniendo una gran fuerza carismática a partir de la cual se sigue comunicando con la población más depauperada cuyas esperanzas en su liderazgo parecen mantenerse vivas. Esta enorme popularidad ha sido aprovechada de modo intensivo para dirigirse a la población a través de los medios. Un programa semanal transmitido por el canal del Estado, De Frente con el Presidente; otro, Aló Presidente, por la Radio Nacional e innumerables y largas “cadenas”²¹ cada vez que el presidente ha creído conveniente informar algo al país (lo cual ha ocurrido en ocasiones más de dos veces en una semana) hablan sobre una avasallante presencia de su figura, que si bien puede ofrecer la ilusión de actividad del presidente, puede generar también y está generando ciertamente, un cierto rechazo. No obstante, la recurrente presencia de Chávez en cada uno de los hogares venezolanos a través de los medios ha producido -en unos sectores más que en otros- lo que Marcos Novaro (1994) ha denominado “identificación por escenificación” para aludir al fenómeno Menem en Argentina. Pero Chávez no sólo ha sido una figura adicta -por decirlo de algún modo- a los recursos mediáticos a través de los cuales prende en la población, sino que, al igual que Fujimori en Perú, según ha señalado Grompone (1996) combina estos recursos con su presencia en la calle reforzando un espacio con el otro.

¹⁸En esto ha sido el discurso tan eficaz que con motivo de las honras funerales al héroe en diciembre de 1998, se escenificó una reyerta entre el gobernador del estado Yaracuy Eduardo Lapi, contrario a Chávez, y los seguidores de éste último, durante los oficios religiosos en honor al “padre de la patria”. Uno de los militantes del chavismo señaló a la prensa: “Lapi me dio un codazo, porque no quería que informara a la televisión que él había cerrado la iglesia e impedido la entrada del pueblo. Yo aguanté y puse la otra mejilla, pero como él volvió a empujarme, lo esquivo y, entonces, cayó sobre la estatua de Bolívar. Fue Bolívar quien cacheteó a Lapi”... en El Nacional, 17.12.1998 D/4.

¹⁹ Emst Cassirer (1997) ha hablado del caudillo-mago, el cual ha tenido que tomar a su cargo todas aquellas funciones que en las sociedades primitivas eran desempeñadas por el mago, personaje poseedor de un poder absoluto, siendo además los médicos que prometían curar todos los males sociales. Para Cassirer, en la sociedad moderna se produce este fenómeno: los políticos hacen las promesas más “improbables y hasta las imposibles; se anuncia un milenio una y otra vez...” (p. 341).

²⁰ Véase El Nacional, 1 6.04.1 999, p. D-2.

²¹ Alocuciones oficiales de obligatoria transmisión por todos los medios audiovisuales, públicos y privados.

De modo que, por ambas vías, la figura del líder es capaz de construir una identidad que recupera la unidad, el sentimiento de pertenencia y fraternidad frente a una sociedad deshilachado, sin representaciones, y sin vértices²².

La ratificación definitiva del tributo al carisma del comandante Chávez que ha sellado la escena política venezolana en los últimos tiempos la encontramos en el evento electoral para escoger los miembros de la Asamblea Constituyente en julio de 1999. El rotundo triunfo del polo oficialista al obtener 121 escaños de los 128 que estaban en disputa, se debió a la confección de un tubo de aspirantes, las famosas “llaves de Chávez” o el “Kino de Chávez”, seleccionados todos por el Presidente. Es necesario aclarar el mecanismo que hizo posible el aplastante triunfo. A pesar de que se utilizó un sistema “nominal”, el carácter de la elección de los constituyentes correspondía más a la confrontación de opciones de política global que a la comparación de las virtudes individuales de cada aspirante en particular. Efectivamente, de un lado se nuclearon los partidarios del Presidente en una sola fórmula (la de las “llaves”) mientras que del otro lado se presentaban los candidatos, provenientes de los escombros de los partidos tradicionales o individualidades independientes, de modo disperso. El resultado: la concentración del voto hizo posible una victoria, en términos de escaños alcanzados, por encima del número de votos obtenidos²³. La adhesión incondicional al líder funcionó reproduciendo en Venezuela el fenómeno por el cual “los electores votan cada vez más por una persona, no por un partido o por un programa” (Manin en Nun, 1998:53) signo de la región en los últimos tiempos.

Presidencialismo exacerbado

Todas las constituciones venezolanas han presentado un sesgo presidencialista muy marcado. Este signo centralista, sin embargo, no ha sido exclusividad de Venezuela. Como se sabe, el nacimiento a la vida republicana de los distintos países latinoamericanos, una vez rotos los vínculos coloniales, estuvo dominado fuertemente por el protagonismo militar del cual dependió el futuro de las jóvenes repúblicas. Así, la estructura militar jerárquica y personalizado incidirá enormemente en la manera de ejercerse el poder político en América Latina con lo cual el militarismo, como apuntan Nohlen y Fernández (1998) ha sido “simultáneo” con el presidencialismo. No obstante, la última Carta Magna aprobada en Diciembre de 1999 ha sido reconocida por diversos analistas y constitucionalistas venezolanos como una de las más signadas por el presidencialismo²⁴.

Más allá de las formas constitucionales, el nuevo gobierno bajo la égida del Comandante Chávez ha desarrollado una gestión fuertemente presidencialista, a tono con el enorme poder que

²² Isaiah Berlin ha entendido al populismo como “la creencia en el valor que posee pertenecerá un grupo o cultura”. (En Mac Rae 1 969:1 91). De manera que, siguiendo a Mac Rae, el populismo es contrario al desarraigo. La emergencia de Chávez y la popularidad que despierta se emparenta sin duda con una sensación de abandono, de pérdida de piso que los sectores más empobrecidos de la población han debido estar sintiendo ante el extravío de referenciales protectores como el Estado y los partidos políticos.

²³ Para ampliar detalles del mecanismo consúltese a Gómez y Patruyo (2000).

²⁴ Tal como señala Brewer Carías (2000) la Constitución de 1999, amén de mezclar el presidencialismo con el militarismo, exagera el primero gracias a la extensión del período constitucional del Presidente de la República, con reelección inmediata y en virtud de la pérdida de balance o contrapeso de los dos poderes, entra otros aspectos por la eliminación del bicameralismo. Además, la novel Constitución contempla la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional por parte del Presidente e incluye reformas como la regularización de las leyes habilitantes o de delegación legislativa a los fines de emisión de Decretos-Leyes lo cual refuerza, según Brewer, el presidencialismo (Véanse pp 106-107).

éste ha podido concentrar a lo largo de este año y medio de ejercicio. De suerte que, la subordinación de todos los poderes constituidos a la Asamblea Nacional en el tiempo que transcurrió el proceso constituyente, según la definición de atribuciones que dicho cuerpo hiciera de sí mismo, sumado al cierre del Congreso, diezmó el equilibrio de poderes característico de los gobiernos republicanos. Si tomamos en cuenta que el carácter y sello de la Asamblea lo determinó el Presidente²⁵, terminamos por reconocer el protagonismo y fortaleza que ha adquirido la figura presidencial. José Sánchez Parga (1998) ha señalado que sólo las democracias presidencialistas latinoamericanas se han encontrado a menudo asediadas por la tentación populista (p. 158). En nuestro caso la “aventura” populista puede encontrar un marco institucional propicio en la Constitución Bolivariana, la cual consagra al Estado como responsable fundamental en la atención de las necesidades de todos los ciudadanos, incluso por encima de sus posibilidades. El reconocimiento del Jefe del Estado como el Estado mismo, típico de los movimientos populistas, no hace sino exacerbar el grado de caudillismo en dosis más que altas²⁶. La personalización del poder político se muestra de este modo como inhibidora de las posibilidades de construcción de ciudadanía y negadora de la necesaria horizontalización del poder a partir de procesos como el de descentralización. A pesar de que la Constitución Bolivariana en su artículo 185 prevé la organización de un Consejo Federal cuya función es coordinar políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios, con lo cual el espíritu descentralizador de la Carta queda recogido, la realidad ha evidenciado otra cosa. Desde que el Comandante Chávez se inició en su ejercicio de gobierno, la tensión entre éste y los poderes regionales y locales de gobierno ha sido la nota dominante²⁷.

²⁵ Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el cambio de nombre de la República propuesto por el Presidente y rechazado por la Asamblea en sus primeras discusiones, las cuales coincidieron con un largo viaje del Presidente al Asia. Súbitamente los venezolanos vieron como, finalmente, los constituyentes complacían al mandatario acogiendo la idea luego de que éste regresara del periplo y llamara la atención al grupo constituyente.

²⁶ Una muestra la encontramos en la Ley del Sistema de Inteligencia aprobada por la Comisión Legislativa Nacional (conocida como “Congresillo”) el 8 de mayo de 2000, la cual permite la creación de un organismo de inteligencia controlado por el Presidente de la República y el Jefe del Servicio Nacional de Seguridad, quien actuará bajo las órdenes exclusivas de aquel. Ante lo que se muestra como una concentración de poder en grado sumo del Presidente, las opiniones en contra no se hicieron esperar y al Ejecutivo no le quedó otra opción que la de devolverla al Congresillo para su modificación.

²⁷ Esta tensión tuvo su punto culminante en los allanamientos de las gobernaciones -la de los estados Mérida y Yaracuy- por parte de la policía política del Estado (DISIP) señaladas como sospechosas de manejos administrativos irregulares. Ambas gobernaciones están en manos de organizaciones partidistas del viejo sistema político venezolano. Los allanamientos han despertado las protestas de la población en sendas entidades. El irrespetuoso trato hacia los poderes locales por parte del Presidente pareciera explicarse por el desdén que le producen estas esferas subnacionales de poder en condiciones en que no parecía seguro un triunfo aplastante de sus candidatos en las regiones. Ante esta eventualidad la vocación recentralizadora se disparó con más fuerza como lo evidencia la frase pronunciada por Chávez en el marco de la campaña electoral para la relegitimación de los poderes: “cambio de gobernaciones y alcaldías por Asamblea Nacional”, en procura de una votación que lo garantizara el control del poder central absoluto luego de las elecciones. De hecho, algunos de los candidatos respaldados por el gobierno en los estados más conflictivos fueron proclamados ganadores (por estrechísimos márgenes) en las elecciones regionales del 30 de julio, en medio de fuertes dudas acerca de la transparencia del proceso electoral. Algunas de estas victorias están todavía siendo disputadas en los organismos electorales y judiciales.

¿La Revolución Cubana como modelo?

Casi desde sus inicios, la gestión de gobierno del Presidente Chávez ha mostrado claros signos de simpatía por el régimen de Fidel Castro. La constante alusión en sus discursos a la amistad que une a Venezuela con la isla, dan fe de ello. En uno de sus viajes a Cuba, Chávez se atrevió a decir que Venezuela marchaba hacia el mismo “mar de la felicidad” que esa nación, lo cual le granjeó muchísimas críticas y sobre todo, gran recelo de algunos sectores de clase media que habían apostado a él. A nuestro juicio, hay en esa postura una gran dosis de romanticismo, cuya fuente parece ser sus contactos con la dirigencia de partidos subversivos de inspiración comunista durante los años 70, cuando apenas transcurrían sus primeros años en el ejército²⁸. Debe señalarse además su recurrente apelación a la figura del cantautor Alí Primera (fallecido ya) cuyas canciones de protesta social de tono comunista identificaron a una generación de venezolanos, comprometidos o no, con la lucha por el socialismo. Chávez ha reconocido en él una fuente de ideas revolucionarias con las cuales emparenta el “proceso revolucionario bolivariano” que vive Venezuela. El apoyo electoral que recibió del antiguo Partido Comunista Venezolano, casi extinto, hizo que viejas figuras de esa organización tales como Pedro Ortega Díaz y Guillermo García Ponce²⁹ se desempolvaren para participar en la Asamblea Nacional Constituyente electa en julio de 1999, cuya misión principal fue la redacción de la Constitución bolivariana. Chávez y su gobierno han exhibido una orientación procubana que ha sesgado de algún modo su política exterior según algunos internacionalistas venezolanos³⁰ y ha desatado una suerte de miniguerra fría, toda vez que ha desarrollado paralelamente un lenguaje antinorteamericano³¹. La aversión a Estados Unidos no sólo ha encontrado expresión en el discurso sino que se materializó en el rechazo a una parte de la ayuda que el propio Ministro de la Defensa Raúl Salazar solicitara a ese país para enfrentar la tarea de remoción de escombros en el devastado estado Vargas a raíz de la tragedia de diciembre de 1999.

Estas posturas antinorteamericanas se han combinado al mismo tiempo con un par de visitas del Presidente a la nación del norte, haciendo contacto en la primera de ellas con figuras del capital norteamericano con vistas a atraer inversiones al país. Su aparición en la bolsa de Nueva York acompañado de su ministro de economía, dando el golpe de mazo que simboliza el cierre de la rueda bursátil, fue un claro mensaje de apertura del gobierno a dicho capital. Contradicciones como ésta recuerdan las prácticas nacionalistas del populismo latinoamericano clásico, las cuales se rasgaban

²⁸ Un trabajo de reciente edición basado en entrevistas a líderes comunistas de la época testimonian este vínculo. En él se muestra como desde la caída misma de la dictadura perejimenista, figuras como la del mítico exguerrillero Douglas Bravo, procuró infiltrar las Fuerzas Armadas Venezolanas con miras a un golpe de Estado de inspiración socialista revolucionaria. Bravo relata en el texto como tomó cuerpo una doctrina que procuró que el marxismo se criollizara tomando “el contenido de los Andes, el contenido de los Llanos, el contenido de la selva, el contenido de la indianidad, el contenido de la negrura que no tenía la doctrina en abstracto”, nutriéndose del pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Esta doctrina se plasmó en un documento llamado “Marxismo-leninismo-bolivariano”. Véase Garrido (1999, pp. 34-35).

²⁹ El primero sigue perteneciendo al PCV. El segundo lo abandonó hace muchos años pero mantiene una orientación marxista.

³⁰ Vilma Petrash, Maruja Tarre, Demetrio Boesner y Adolfo Salgueiro han coincidido en que las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos no atraviesan un “buen momento” debido a los “enfrentamientos” y las “pequeñas provocaciones” que el gobierno venezolano ha desplegado con respecto a la nación del norte. Véase Garrido Tal Cual del día 03.07.2000 p. 3.

³¹ Esto ha despertado inquietud en el Departamento de Estado y en estos momentos se espera un cambio de Embajador que apunta al establecimiento de una línea más dura que la actual.

con una mano las vestiduras por la soberanía nacional enfrentando a Estados Unidos, mientras que con la otra procuraban atraerlos a su terreno³².

La cuestión militar

Desde antes de la toma del poder, Chávez anunció al país sus planes con el estamento militar. Se trataba según él, de devolver el ejército al pueblo para ponerlo al servicio de los ciudadanos³³. Surgió así el Plan Bolívar 2000³⁴, mediante el cual el gobierno empleando los recursos militares, técnico y profesionales, se dispuso a atender a la población más necesitada en materia de salud, alimentación, vialidad, etc. con una orientación claramente selectiva, lo que permite emparentarla con el modelo “neopopulista”. Con el Plan, se ha intentado difuminar las instancias intermedias de gobierno sustrayéndolas responsabilidades y escamoteándoles recursos, por lo cual Alcaldías y Gobernaciones han denunciado la presencia de tácticas de asfixia por parte del gobierno central.

Los destinos de los dineros públicos han sido, durante en el primer año y medio de gobierno, las guarniciones militares de los distintos estados, en detrimento de las gobernaciones y, adicionalmente, el Plan ha manejado los recursos que se le han asignado como secreto militar, con lo cual se ha impedido las funciones contraloras que deberían ejercerse sobre él. No obstante, han sido detectadas y denunciadas a la opinión pública corruptelas en el manejo de esos recursos (Véase El Nacional, 22.07.99 p.H1). Al mismo tiempo, la administración pública venezolana se ha visto copada por militares en diversos puestos claves, muchos de ellos sin experiencia alguna, desplazando en buena medida al funcionariado civil con años de aprendizaje burocrático-administrativo (Véase El Nacional, 27.06.99 H1).

Pero el Plan Bolívar 2000 podría también interpretarse como una punta de lanza para la concreción de una eventual intención del Presidente y parte del liderazgo militar que le acompaña, de conformar una suerte de partido militar que suplante a las organizaciones políticas desvencijadas. Esto ha planteado una ferviente discusión en el país sobre las relaciones cívico-militares. La clave del asunto está sin duda en el carácter político que el Presidente ha querido conferirle al estamento militar con el pretexto de devolverles la ciudadanía a los militares que los partidos del Pacto de Punto Fijo, según él, le secuestraron³⁵. Así las cosas, los hombres de armas se han lanzado con no

³² Esta dualidad está presente por, ejemplo en Lázaro Cárdenas, quien al tiempo que se afanó en la construcción de autonomía, negoció el dominio estadounidense en la economía nacional mexicana (Semo 1998).

³³ Nuestros hermanos de armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases aéreas con la gran capacidad, con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí como desactivados, como si fuera otro mundo eso, separados de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección de recursos de moral, de disciplina”. Discurso de toma de posesión, 2 de febrero de 1999. Biblioteca electrónica Venezuela Analítica.

³⁴ El Proyecto Bolívar 2000 se inició 25 días después de la toma de posesión del Presidente el 2 de febrero de 1999, con la primera fase que dividió al país en 26 teatros de operaciones sociales y un presupuesto de 12 millardos de bolívares. La agenda de tareas contempla atención médica, servicios odontológicos, intervenciones quirúrgicas, reparaciones de infraestructuras escolares, hospitalarias, viales, saneamiento ambiental, entre otras. Para detalles véase El Nacional 27.02.1999.

³⁵ Recordemos aquí que con la Constitución de 1961, con la cual se reinicia la democracia venezolana, se sujeta expresamente el poder militar al poder civil, en sintonía con los parámetros de la democracia liberal. Los 40 años que transcurren entre 1959 y 1999 constituyen un paréntesis del predominio militar sobre el civil toda vez que nuestra historia republicana estuvo signada por la hegemonía de los uniformados.

disimulado ánimo a la discusión política, aspirando muchos de ellos a ocupar gobernaciones y alcaldías³⁶.

De este modo, las Fuerzas Armadas están siendo distraídas de sus funciones profesionales-seguridad y defensa para entrar en un callejón del que pueden salir desnaturalizadas y desprestigiadas como han salido otros ejércitos del área. Ellas no están capacitadas para lidiar con sociedades altamente complejas como la venezolana, por lo cual un proyecto de corte militar como el que se pretende imponer les afecta a ellas mismas en primer lugar. Este proyecto militarista es congruente con las ideas del sociólogo argentino Norberto Ceresole, mentor ideológico de Chávez³⁷ quien postula la teoría de que en países de escaso desarrollo institucional, el ejército es el único instrumento capaz de planificar, centralizar y gobernar, en el marco de la ecuación caudillo-ejército-masa. El proyecto en boca de Ceresole apunta a “licuar” las instancias intermedias de representación para dejar el espacio plenamente a la relación caudillo-pueblo con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Así, la figura del líder ocupa la escena ejerciendo el poder unilateralmente. La influencia de este postulado en el Presidente Chávez quedó de manifiesto en la comunicación que éste enviara a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en abril de 1999 al señalar “... El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Inmerso en un peligroso escenario de causas generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin) debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado” (El Nacional, 14.04.99). (Énfasis nuestro).

Este proyecto militarista, sin embargo, se vio debilitado a raíz de la candidatura de su otrora compañero de aventura golpista, Francisco Arias Cárdenas, ex-gobernador del Estado Zulia, quien se manifestó abiertamente contra el proyecto y prometía, en caso de ganar las elecciones “devolver los militares a sus cuarteles”. Para ello aducía que las Fuerzas Armadas no sólo están expuestas a inmiscuirse en prácticas de corrupción al asignárselas exorbitantes sumas de dinero para conducir el Plan Bolívar 2000, sino que ese hecho propicia la “minusvalía” de la nación frente al resto de naciones, al desviar las funciones de la F.A.N hacia otras que no le competen (El Nacional, 14.05.2000, p. D1). No conocemos exactamente las proporciones, pero estamos seguros que una significativa parte del cuerpo armado nacional, está de acuerdo con este planteamiento, lo cual introduce una fractura en éste cuyo desenlace no estamos en capacidad de predecir. Algunos

³⁶ Es el caso del Capitán Johnny Yáñez, responsable del Plan Bolívar 2000 en el Estado Cojedes, quien aprovechando su cargo, hizo proselitismo político con miras a lanzarse a la gobernación de esa entidad, lo que logró con el apoyo del Presidente, desplazando a la líder natural de la región Haydée Franco, fundadora del Movimiento V República, partido del gobierno, en ese Estado. Un total de catorce militares retirados se postularon para distintas gobernaciones, lo que revela, sin duda, el ascenso de las aspiraciones de los militares a ejercer un importante papel en el liderazgo político venezolano.

³⁷ Chávez no ha ocultado su vínculo con Ceresole, quien ha sido acusado de antisemita y afecto a los carapintadas argentinos. El sociólogo ha señalado que “mi trabajo es hacer que lo que yo piense, lo piense él”. (El Universal, 07.05.99 p.1-16). No obstante, con la suspensión de los comicios Ceresole escribió un artículo para la prensa nacional titulado “Los mariscales de la derrota”. En él, Ceresole se queja de los líderes más cercanos a Chávez “ilustres miembros del saco de gatos” a quienes acusa de haber enfado el ritmo de la revolución gracias a su “incapacidad, oportunismo e indecencias operativas”. (Véase EL Universal, 27.05.00 p 1-2). No sabemos si esta dura crítica a los más estrechos colaboradores del Presidente se traduce en una retirada de este polémico personaje de la asesoría ideológica que brindó al Presidente.

miembros de las Fuerzas Armadas han mostrado públicamente su disgusto con el gobierno del Presidente Chávez³⁸. En todo caso, nos atrevemos a señalar que un proyecto populista de corte militarista no es descartable, aunque contaría con fuertes resistencias tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como en amplios sectores de la sociedad venezolana, incluyendo algunos de los aliados civiles del Presidente Chávez.

Conclusiones

En las páginas precedentes, hemos examinado rasgos y dinámicas del actual gobierno venezolano a partir de su contexto histórico y de referencias teóricas. Desde el primer punto de vista, puede constatarse una veta de populismo en la Venezuela del siglo XX, que se inaugura en forma radical en 1945, para estabilizarse en forma atenuada a partir de 1958. Los actores e instituciones protagonistas de este populismo atenuado, después de lograr un relativo éxito en términos de crecimiento y distribución durante dos décadas, comienzan a perder su capacidad de generar y mantener apoyos a partir de finales de la década de los ochenta. Pero las críticas y la desafección hacia esos actores no significo necesariamente que hubiera desaparecido la inclinación populista de la cultura política venezolana.

Además de la ineficacia y corrupción crecientes de los actores centrales del “sistema populista de conciliación”, dos grandes tendencias sociales contribuyeron a sellar su descalabro. Por un lado, los diagnósticos de signo modernizador centradas alrededor del predominio del mercado sobre el Estado, acusaban a los regímenes populistas de ser obstáculos al desarrollo en lugar de ser sus promotores, en la medida en que persistían en aplicar recetas estatistas en un contexto mundial que las hacía obsoletas. Por otro lado, amplios sectores populares que habían sido los principales beneficiados de las políticas populistas en la etapa en que fueron incluidos como derechohabientes en un modelo de crecimiento distributivista, comenzaron a experimentar procesos de creciente exclusión, ocasionados por el agotamiento del modelo rentista.

La campaña electoral de 1998 expresó en las dos candidaturas mayoritarias estas dos grandes tendencias. Por una parte, la crítica “modernizadora” al populismo cristalizó en la candidatura de Salas Romer, mientras los excluidos se volcaron hacia la figura carismática de Chávez, quien emprendió una estrategia de campaña claramente populista. Uno de los rasgos que nos permite caracterizaría de esa forma, es su carácter confrontacional y polarizador, su apelación al “pueblo” como sujeto que trasciende las divisiones partidistas para enfrentar a una minoría a la que califica de oligárquica, corrupta y antipatriótica.

³⁸ Es el caso del Capitán Luis García Morales, de la Guardia Nacional, quien grabó un video que no llegó a transmitirse por televisión, instando al Presidente a renunciar al cargo. El otro, el Coronel Silvino Bustillos, de la Aviación, en comunicación al Comandante del Ejército Cucas Rincón se declaró "resentido institucional que discrepa de la actitud omisa y complaciente del Presidente, soy un oficial que perdió la fe y el respeto en su actual cadena de mando" (Tal Cual 29.06.2000. p1).

La victoria electoral fue sólo el primer paso de una rápida ofensiva que barrió a su paso con la totalidad de las instituciones del sistema político anterior: Congreso, Corte Suprema, Poder Judicial y órganos de control externo fueron gradualmente sometidos o disueltos, debido a la combinación entre el masivo apoyo popular del nuevo Presidente y la debilidad intrínseca en la que habían caído todas esas instituciones, por su incapacidad para reformarse. Otros poderes intermedios, como las gobernaciones y alcaldías, tenían un grado algo mayor de legitimidad, debido a su origen en elecciones directas; sin embargo, dado que la mayoría de ellos eran controlados por dirigentes identificados con los partidos tradicionales, el nuevo gobierno los sometió a un cerco económico y amenazas de intervención. Estos procesos desembocaron en una altísima concentración de poder en la figura presidencial. La forma en la cual se ha utilizado este poder reafirma, a nuestros ojos, el carácter populista del régimen.

El discurso populista de Chávez no desapareció con la campana electoral que lo llevó a la Presidencia. Se ha mantenido casi inalterable durante el primer año y medio de su gobierno, aderezado con altas dosis de confrontación con los empresarios, los medios de comunicación, la Iglesia y por supuesto con los debilitados partidos tradicionales. Con motivo del discurso conciliador que pronunciara el día en que fuera electo Presidente, muchos confiaron en que la pugnacidad amainara y la transición estuviera menos marcada por el antagonismo. No obstante, Chávez sigue enfrentando discursivamente a la oligarquía, encarnada en las “cúpulas podridas del puntofijismo” cuyos gobiernos aplicaron fórmulas del “neoliberalismo salvaje” para empobrecer al pueblo. Como Bucaram en Ecuador, Chávez no ha desactivado su lenguaje confrontacional, logrando mantener su oxígeno político en los sectores más pobres, los que ven en su figura una suerte de vengador de las injusticias que padecieron bajo los gobiernos de aquellas cúpulas. Mucho menos las promesas de redención popular han desaparecido. Ambos contenidos discursivos -confrontación y apelación a los sujetos populares- tienen mucho del populismo clásico, sobre todo el desplegado por Perón en Argentina.

Sin embargo, más allá de los recursos simbólicos manejados muy eficientemente por Chávez, su programa económico presenta, tal como hemos visto, una clara veta neoliberal en contradicción con una Constitución que también contiene fuertes rasgos estatistas y populistas. Si este plan económico cristalizara, estaríamos en presencia de un discurso anti-neoliberal y nacionalista negado en el terreno de las acciones. Esta aparente contradicción, sin embargo, se resolvería si Chávez logra conciliar las prácticas neoliberales con una agenda populista, tal como lo lograron Menem y Fujimori. De acuerdo a lo señalado, esto dependerá de cómo el Presidente resuelva la tensión entre una visión con elementos románticos y comunistas de la sociedad y la necesidad de ajustarse a la dinámica real, tanto nacional como global, que obliga inevitablemente al pragmatismo, so pena de aislamiento y retraso. Si en el caso de Fujimori, la privatización de empresas del Estado proveyó los recursos para adelantar programas sociales localizados en los sectores más pobres, en Venezuela esto no pareciera ser inminentemente necesario, toda vez que las arcas del Estado se han visto robustecidas como consecuencia de la disparada de los precios del petróleo en el año 2000. Ello le ha permitido a Chávez adelantar medidas sociales de corte universal como el aumento de salarios decretado en dos oportunidades, combinadas con programas selectivos como el Plan Bolívar 2000, dirigido a la población más depauperada y mecanismos de financiamiento destinados a los microempresarios.

Ambos tipos de medidas tienen en Chávez su responsable fundamental, con lo cual se han difuminado las instancias intermedias de gobierno y obviado las negociaciones entre actores para

concretarlas. Con ello, la gestión chavista se emparenta con las expresiones recientes del populismo liberal en la región y se aleja de las versiones clásicas caracterizadas por el fortalecimiento de las representaciones populares, y los sindicatos, entre otros.

Es necesario apuntar sin embargo dos factores condicionantes: las experiencias neopopulistas que han logrado mantenerse en el tiempo, han sido signadas por una práctica de gobierno que ha descansado sobre los hombros de tecnocracias eficientes, despojadas del signo clientelar. Este parece ser el requisito, no sólo para la concreción de medidas económicas atinadas, sino también para la puesta en acción de programas sociales de envergadura, capaces de mantener con vida una clientela electoral que asegure la pervivencia del modelo.

Hasta ahora esto no parece cristalizar en el caso venezolano. La incapacidad administrativa y gerencial ha sido rasgo dominante de las capas que han cumplido ejercicio público, como quedó demostrado fehacientemente con el fiasco de las elecciones previstas para el 28 de mayo. En añadidura, Chávez y su gobierno han despertado el temor y recelo de la clase media, franja de la cual provienen cuadros aptos para las funciones administrativas. De modo pues que el proyecto puede verse amenazado de no producirse un viraje del chavismo hacia ese sector.

Por otra parte, las manifestaciones de descontento en el cuerpo militar con respecto al gobierno, indican sin duda una fractura de su base de apoyo que no podemos predecir en qué desembocará. En todo caso, sectores de las Fuerzas Armadas han dado indicios -aunque no abiertamente- de su descontento con el Plan Bolívar 2000 y otras intervenciones personalistas del Presidente en la vida interna de la institución armada, lo que eventualmente pudiera abrir una fuente de tensión cuyo desenlace afectaría el curso del modelo populista adelantado por Chávez.

Bibliografía

- ALVAREZ, Ángel E. (comp) et al. 1996. **El Sistema Político Venezolano: Crisis y Transformaciones**. Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas-UCV.
- ARENAS, Nelly y GÓMEZ CALCAÑO, Luis. 1 999. “**De la Revolución de Octubre a la V República Bolivariana**”. Ponencia presentada en el XX Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS). Concepción, Chile.
- BLANCO MUÑOZ, Agustín. 1998. **Habla el comandante**. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- BREWER CARIAS, Allan. 2000. **La Constitución de 1999**. Caracas: Ediciones Arte.
- BRICEÑO IRAGORRY, Mario. 1951. **Mensaje sin destino**. Caracas: Tipografía Americana.
- BURBANO DE LARA, Felipe (editor). 1998. **El fantasma del populismo. Aproximación a un tema siempre actual**. Caracas: Edie. Nueva Sociedad.
- CASSIRER, Ernst. 1997. **El mito del Estado**. México: F.C.E.

- CAVAROZZI, Marcelo. 1994. "Beyond Transitions to Democracy in Latin America", **Journal of Latin American Studies**, Vol. 24, N2 2.
- CORDI PLAN. 1 999. (Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República), **Programa económico de transición 1999-2000**. Caracas.
- CRISP, Brian y Daniel H. LEVINE. 1998. "Democratizing the Democracy? Crisis and Reform in Venezuela". **Journal of Interamerican Studies and World Affairs**, Summer V. 40 N° 2.
- ELLNER, Steve. 1997. "El apogeo del populismo radical en Venezuela". **Revista de Economía y Ciencias Sociales**. Vol. 3, N° 1.
- GARRETÓN, Manuel A. 1995. **Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones**. México: FCE.
- GARRIDO, Alberto. 1999. **Guerrilla y conspiración militar en Venezuela. Testimonios de Douglas Bravo Izarra y Francisco Prada**. Mérida: Editorial Venezolana.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis. 1992. "Venezuela: perte de légitimite démocratique et coup d'Etat", **Problèmes d'Amérique Latine**, N° 6, juillet-septembre. -. 1995.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis. 1995 "Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela", **Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales**, N° 2-3, abril-septiembre.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis y PATRUYO, Thanali. 2000. "Entre la esperanza popular y la crisis económica: la transición política en Venezuela" **Cuadernos del CENDES** N° 43, enero-abril.
- KORNBLITH, Miriam. 1998. **Venezuela en los noventa: las crisis de la democracia**. Caracas: IESA.
- LÓPEZ MAYA, Margarita. 1996. "Nuevos actores en la crisis de legitimidad del sistema político venezolano: La Causa R, Convergencia y el MBR-200", **Cuadernos del CENDES**, N° 32, mayo-agosto.
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, República Bolivariana de Venezuela. 2000. **Programa Económico Año 2000**, Caracas, Ministerio de Planificación y Desarrollo.
- NOHLEN, Dieter y FERNÁNDEZ, Mario. 1998. **El presidencialismo latinoamericano: Evolución y perspectivas en el presidencialismo renovado**. Nohlen y Fernández (Edit.). Caracas: Nueva Sociedad.
- NOVARO, Marcos. 1994. "Menemismo y peronismo: viejo y nuevo populismo". **Cuadernos del Claeh**, No 71, Montevideo.

NUN, José. 1998. "Populismo, representación y menenismo". En: Burbaro De Lara, Felipe (editor). **El fantasma del populismo. Aproximación a un tema siempre actual.** Caracas: Nueva Sociedad.

OXHORN, Philip. 1998. "The social foundations of Latin America's recurrent populism: problems of popular sector class formation and collective action". **Journal or Historical Sociology**, June, Vol. 11, N° 2.

PÉCAUT, Daniel. 1987. **L'Ordre et la violence. Évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953.** Paris, EHESS.

REY, Juan Carlos. 1988. **El futuro de la democracia en Venezuela,** Caracas: IDEA.

ROBERTS, Kenneth. 1998. "El Neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina" En: Moira Mackinnon, María y Petrone, Mario Alberto (comp.) **Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta.** Buenos Aires: Eudeba.

SALAMANCA, Luis. 1993. "El sistema político Venezolano: una lectura desde la sociedad civil" En: Serbin, A; Stambouli, A; Mc Coy, J y Smith, W. (eds), **Venezuela: la democracia bajo presión,** Caracas: INVESP/North- Sourth Center (Universidad de Miami)/ Nueva Sociedad.

_____ 1997. **Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela.** Caracas: UCV-ILDIS.

SANCHEZ PARGA, José. 1998. "Encubrimientos sociopolíticos del populismo". En de Lara (edit.). **El fantasma del populismo,** Nueva Sociedad.

TOURAINÉ, Alain. 1998. "Las políticas nacional-populares". En: Moira Mackinnon, María y Petrono, Marlo Alberto (comp.) **Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta.** Buenos Aires: Eudeba.

UZCÁTEGUI, Luis José. 1999. **Chávez el mago de las emociones.** Caracas, Edic. Lithopolar.

ZERMEÑO, Sergio. 1989. "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden". *Revista Mexicana de Sociología*, NO 4, Vol. 51.

PRENSA

El Nacional, Caracas, ediciones de 1998 a 2000.

Tal Cual, Caracas, ediciones de 2000.